



TRIBUNAL  
SANCIONADOR

Fecha: 29/04/2019  
Hora: 11:43  
Lugar: San Salvador, San Salvador.

Referencia: 1546-18

### RESOLUCIÓN FINAL

Documentos que  
antecedan:

El día 13/11/2018 se recibió escrito firmado por el licenciado  
apoderado especial de S.A. de C.V., a través del  
cual evacua la audiencia conferida mediante resolución de las 15:39 horas del día  
9/10/2018.

En virtud de estar acredita la personería con la que comparece el referido  
profesional y estar legitimada la intervención de su representada, se tiene por parte a  
la proveedora , S.A. de C.V. por medio de su apoderado licenciado  
, y por agregada la documentación anexa a su  
escrito. Además, se toma nota de los medios técnicos señalados para recibir  
notificaciones.

### I. INTERVINIENTES

Denunciante:

Presidencia de la Defensoría del Consumidor.

Proveedora denunciada:

S.A. de C.V.

### II. HECHOS DENUNCIADOS

La Presidencia de la Defensoría del Consumidor expuso en su denuncia que en ejercicio de lo  
dispuesto en el artículo 58 letra f) de la Ley de Protección al Consumidor —LPC—, el 9/2/2018 y el  
12/4/2018 se practicaron inspecciones en los establecimientos denominados

” y “ propiedad de la  
proveedora S.A. de C.V.

Como resultado de las diligencias realizadas se levantaron las actas correspondientes —folios 3 y  
9—, en las cuales se documentó la revisión de los productos que se encuentran para disposición de los  
consumidores. Asimismo, en los anexos uno de las referidas actas, denominados Formulario para  
inspección de fechas de vencimiento —folios 4 y 10—, se detallan productos que la proveedora tenía a  
disposición de los consumidores y que se encuentran vencidos.

### III. INFRACCIÓN ATRIBUIDA

A la proveedora denunciada se le atribuye la infracción establecida en el artículo 44 letra a) de la  
LPC por ofrecer al consumidor bienes o productos vencidos.

### IV. CONTESTACIÓN DE LA PROVEEDORA DENUNCIADA

Durante el plazo de audiencia otorgado, el apoderado de la proveedora denunciada señaló (folios 19  
y 20) que como se ha determinado claramente en las actas de inspección que se agregan al presente

procedimiento sancionador, los productos que se encontraron vencidos, no estaban siendo ofrecidos, donados, ni puestos en circulación a ningún título, puesto que ninguno de los empleados de las tiendas de conveniencia estaba ofreciendo los productos para consumo de los clientes.

Asimismo, manifestó que de manera inmediata a la inspección, y como consta en el procedimiento iniciado, se procedió a efectuar la destrucción de estos productos, con la anuencia y participación de los empleados de su representada. Sostuvo que se trata de culpar a su representada por un hecho que nunca cometió, ya que nunca entregó producto vencido a los consumidores, pues tal como se constata en las mismas fotografías agregadas a los procesos de inspección, los productos estaban colocados en una góndola, sin ser ofrecidos y promovidos por los empleados de su representada al público.

#### **V. ELEMENTOS DE LA INFRACCIÓN ATRIBUIDA**

El artículo 14 de la LPC establece que *se prohíbe ofrecer al público, donar o poner en circulación a cualquier otro título, toda clase de productos o bienes con posterioridad a la fecha de vencimiento o cuya masa, volumen, calidad o cualquier otra medida especificada en los mismos se encuentre alterada*. De ahí que el artículo 44 de la LPC determina que *"Son infracciones muy graves, las acciones u omisiones siguientes: a) Ofrecer al consumidor bienes o productos vencidos (...)".*

El término «ofrecer» a que hace referencia la ley, puede entenderse como el hecho de tener una diversidad de productos dentro de un establecimiento con el ánimo de invitar al consumidor que los adquiera para su uso o consumo. Partiendo de la anterior premisa, la conducta ilícita es por consiguiente el ofrecimiento al público de cualquier clase de productos o bienes, cuya fecha de vencimiento ya ha expirado.

#### **VI. VALORACIÓN DE PRUEBA/HECHOS PROBADOS**

1. De conformidad con los artículos 146 de la LPC y 313 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria conforme al artículo 167 de la LPC, las pruebas oportunas, pertinentes y conducentes aportadas en el procedimiento, serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, para determinar los hechos probados relacionados con la infracción al artículo 44 letra a) de la LPC.

Al respecto, cabe señalar lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la LPC, el cual literalmente establece: *Las actas mediante las cuales los funcionarios de la Defensoría hagan constar las actuaciones que realicen, harán fe, en tanto no se demuestre con prueba pertinente y suficiente su inexactitud o falsedad. El mismo valor probatorio tendrán los informes y otros documentos que emitan los funcionarios y empleados de la Defensoría, en el ejercicio de sus funciones.*

2. Constan en el expediente administrativo los siguientes medios de prueba:

a) Acta N° 313 —folio 3— de fecha 9/2/2018 y anexo uno denominado Formulario para inspección de fechas de vencimiento —folio 4—, por medio de los cuales se establece que la Defensoría del Consumidor realizó inspección en el establecimiento

3, propiedad de la proveedora, así como el hallazgo consistente en 1 yogurt que se encontraba con un día posterior a su fecha de vencimiento, y que el mismo estaba en cámara refrigerante dentro de la sala de venta, por lo que al tratarse de un producto lácteo, al estar vencido representa un mayor peligro para la salud de los consumidores, de acuerdo a la clasificación de los alimentos por su riesgo (Reglamento Técnico Centroamericano 67.04.50:08 Alimentos. Criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, números 5.1.1, 5.2.1 y 6).

b) Acta N° 312 —folio 9— de fecha 12/4/2018 y anexo uno denominado Formulario para inspección de fechas de vencimiento —folio 10—, por medio de los cuales se establece que la Defensoría del Consumidor realizó inspección en el establecimiento San Miguel, propiedad de la proveedora, así como el hallazgo consistente en 2 productos que se encontraban con 19 y 26 días posteriores a su fecha de vencimiento respectivamente, y que los mismos estaban en góndola dentro de la sala de venta.

c) Impresiones de fotografías —folios 7 y 14— relacionadas con las actas N° 313 y 312 de fechas 9/02/2018 y 12/04/2018, con las cuales se establece la presentación de los productos objeto de hallazgo.

Con relación a la documentación antes relacionada, se advierte que esta no ha sido controvertida con prueba idónea en contrario por la proveedora, no obstante haber tenido la oportunidad para hacerlo. Por ello, se infiere que los citados documentos, al mantener una conexión lógica con los hechos alegados en la denuncia, adquieren total certeza.

## VII. ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, sobre la base de los hechos probados con los documentos agregados en folios 3, 4, 9 y 10, se concluye que la proveedora, efectivamente, tenía a disposición para los consumidores productos con posterioridad a su fecha de vencimiento — entre 1 y 26 días de vencidos—. Lo anterior configura la conducta ilícita establecida en el artículo 44 letra a) de la LPC.

Finalmente, se advierte que aun cuando no haya existido dolo de parte de la proveedora en incumplir con los mandatos contenidos en la ley de la materia, este Tribunal en reiteradas ocasiones ha establecido a través de sus resoluciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 inciso 2° de la LPC, que las infracciones administrativas son sancionables aun a título de simple negligencia o descuido. En el presente caso queda evidenciado que la proveedora incurrió en la comisión de la infracción regulada en el artículo 44 letra a) de la LPC, actuando con **negligencia** de su parte, ante la falta de esmero en verificar que en sus establecimientos no hubiera a disposición de los consumidores productos vencidos.

Respecto a los argumentos de la proveedora, debe señalarse que según los anexos 1 de las actas de inspección, los productos en cuestión fueron encontrados en cámara refrigerante y en góndola dentro de la sala de venta, de lo cual puede observarse que los mismos sí estaban dentro del establecimiento en

lugares donde se encuentran los productos aptos para ser comercializados y ofrecidos al público, por lo que no puede tenerse como cierto el argumento expuesto por el apoderado de la proveedora, en el sentido que dichos productos no estaban siendo ofrecidos y promovidos al público. Incluso, consta en ambas actas de inspección que previo al inicio de la inspección se le consultó a la persona encargada si poseían productos que no se utilicen para ser vendidos a los consumidores; y, la Gerente de

respondió que sí poseían productos para cambio en caja de cartón en área de despacho debidamente rotulados y separados, por lo que los mismos no fueron objeto de revisión durante la inspección; y por su parte en el caso del Administrador de

San Miguel respondió que sí, por lo que dichos productos no fueron objeto de revisión en la referida inspección.

Asimismo, cabe aclarar que el hecho que de manera inmediata a la inspección se procedió a efectuar la destrucción de los productos, con la anuencia y participación de los empleados de su representada, no es una situación que desvirtúe la infracción atribuida, pues la destrucción de los productos en el presente caso, se llevó a cabo conforme a la facultad de la Defensoría del Consumidor establecida en el art. 50 letra a) de la LPC, tal como consta en las actas de destrucción de producto que se encuentran agregadas a folios 5, 6, 11 y 12 del expediente administrativo; en ese sentido, tal situación no le exime de responsabilidad respecto de la conducta que configura la infracción al artículo 44 letra a) de la LPC, pues en la referidas actas de destrucción tanto la gerente como el administrador respectivamente de los establecimientos inspeccionados admiten que hubo error involuntario en la revisión de los productos, lo cual revela negligencia por parte de la proveedora de no verificar ni asegurarse que los productos que ofrece cumplan con la normativa de consumo, es decir que existe una omisión de sus obligaciones como proveedor.

#### **VIII. PARÁMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN**

Habiéndose comprobado que la proveedora cometió la infracción establecida en el artículo 44 letra a) de la LPC, es procedente la imposición de la sanción prevista en el artículo 47 de la LPC, según los parámetros establecidos en la ley en mención.

Para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LPC, debe considerarse que la proveedora es propietaria de los establecimientos inspeccionados, denominados ‘  
y *San Miguel*’, los cuales se encuentran ubicados en los departamentos de San Salvador y San Miguel, según documentación incorporada de folios 25 al 28, la denunciada supera las ventas mensuales promedio de una *Pequeña Empresa*, al momento en que cometió la infracción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa; así como que por el giro de su

negocio es imperioso que atienda las obligaciones y prohibiciones establecidas en la LPC, a fin de garantizar productos confiables y de calidad a los consumidores.

Con la conducta descrita, el proveedor ha incurrido de forma negligente en un menoscabo al derecho a la salud de los consumidores, a consecuencia de ofrecer productos con posterioridad a la fecha de vencimiento en sus establecimientos comerciales, lo cual representa un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Finalmente, es menester destacar que por la actividad económica de la denunciada, que consiste en ofrecer gran variedad de alimentos y bebidas, debía cumplir con la exigencia de poner a disposición de los consumidores productos que cumplieran con las exigencias legales, y no tener productos con 19 y con 26 días de vencidos, y que uno de ellos era un producto lácteo, el cual al estar vencido representa un mayor riesgo para la salud de los consumidores, de conformidad a la clasificación de los alimentos por su riesgo señalada en el Reglamento Técnico Centroamericano 67.04.50:08.

#### IX. DECISIÓN

Por tanto, sobre la base de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 11, 14, 101 inciso 2° de la Constitución de la República; 14, 40, 44 letra a), 47, 49, 83 letra b), 144 y siguientes de la LPC, este Tribunal **RESUELVE:**

a) *Sancionar* a la proveedora S.A. de C.V. con la cantidad de **NOVECIENTOS DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS (\$912.50), equivalentes a tres salarios mínimos mensuales en la industria** —D. E. N° 6 del 21/12/2017, publicado en el D. O. N° 240, tomo 417 del 22/12/2017— en concepto de multa por la comisión de la infracción regulada en el artículo 44 letra a) de la LPC, por ofrecer productos vencidos a los consumidores.

Dicha multa debe hacerse efectiva en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, **dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación de esta resolución**, debiendo comprobar a este Tribunal su cumplimiento dentro del plazo indicado; caso contrario, la Secretaría de este Tribunal **certificará la presente resolución para ser remitida a la Fiscalía General de la República para su ejecución forzosa.**

b) *Tomar nota* de la dirección de correo electrónico y número de fax, señaladas por el apoderado de la proveedora para recibir notificaciones.

Notifíquese.

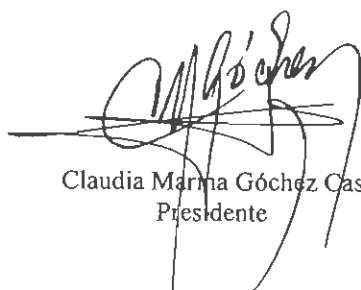
#### INFORMACIÓN SOBRE RECURSO

La presente resolución no admite recurso, de conformidad con lo expuesto en el artículo 167 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Administrativos, según el cual: *“Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se regirán en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.”*; en relación con el artículo 158 N° 5 del mismo cuerpo

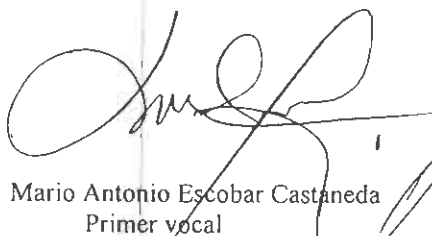
normativo que dispone: "La resolución por la que se decida tramitar el expediente mediante el procedimiento simplificado y la resolución que pone fin al procedimiento, no admitirán ningún recurso (...)".

**PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR.**

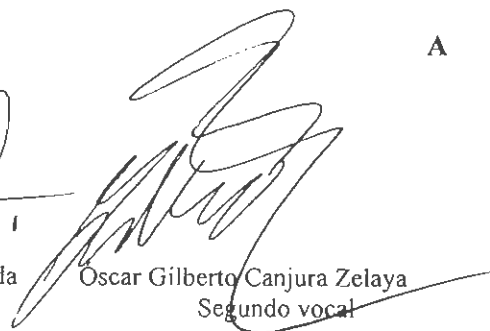
A



Claudia Marina Gómez Castillo  
Presidente



Mario Antonio Escobar Castaneda  
Primer vocal



Oscar Gilberto Canjura Zelaya  
Segundo vocal



Secretario del Tribunal